JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, cinco de octubre de dos mil veinte

Radicado 05001 31 03 019 2020 00118 00

OBJETO

Con apego al principio de economía procesal, procede el Despacho en esta oportunidad a desatar los recursos de reposición y en subsidio apelación propuestos por la gestora judicial de la sociedad ejecutada, en contra de las decisiones del pasado **10 de agosto de 2020 y 14 de septiembre hogaño**, respectivamente.

1. ANTECEDENTES

1.1. De lo actuado. Para el día **10 de agosto de 2020**, de manera coetánea con el proveído que ordenó librar mandamiento de pago por los derechos de crédito contenidos en los cartulares base de ejecución, a petición del extremo activo, el Despacho decretó a través de auto una serie de medidas cautelares sobre el patrimonio de la sociedad demandada (Cfr. Fls. 28 y ss. Exp Cdno Medidas al 5 de septiembre – Exp Digital).

A su turno, luego para el día **14 de septiembre de 2020** esta Judicatura decretó otras medidas previas de embargo y secuestro, luego de haber obtenido la respuesta de la entidad Transunión y la información del lugar de rodamiento de un vehículo embargado, suministrada por la procuradora judicial de la parte ejecutante (Cfr. Archivo 20 Cdno medidas – Exp Digital).

1.2. De los recursos propuestos. Inconforme con estas dos decisiones, la mandataria judicial de la parte demandada propuso recurso de reposición y en subsidio apelación en la debida oportunidad para ambos proveídos.

Frente al auto del **10 de agosto del corriente**, acotó la procuradora judicial que el decreto de las medidas no resultaba acorde con la apariencia de buen derecho que debe existir como para acceder al decreto de medidas previas, pues adujo que las facturas cambiarias base de ejecución se encuentran en entredicho al existir actualmente un proceso penal en curso que se ocupa de evaluar la falsedad en la confección y emisión de los títulos adosados a la presente ejecución. Por tanto, tras relatar los pormenores de la circunstancia señalada, solicitó la **suspensión del trámite ejecutivo** y, a su vez, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, a efectos de no ocasionar un perjuicio mayor sobre el ente societario ejecutado.

Seguidamente, esboza la recurrente que las medidas decretadas no se ajustan al principio de proporcionalidad, pues asevera que las mismas exceden el monto de lo ejecutado, y que además se fundamentan en unas facturas cambiarias que, según aduce la togada, la sociedad convocada no adeuda realmente.

Finalmente, en consideración a las medidas decretadas a la actualidad, la profesional del derecho solicita al Despacho fijar una caución a efectos de levantar las precautorias decretadas a la fecha, en los términos de los artículos 602 y 603 del Código General del Proceso.

De otro lado, de cara a la decisión del **14 de septiembre hogaño**, la recurrente reiteró lo indicado en el recurso previamente sintetizado, y recalcó que no se podía continuar decretando más medidas cautelares, cuando el auto del 10 de agosto del corriente no se

encontraba en firme por cuenta del recurso propuesto en debida oportunidad (Cfr. Archivo 24 Cdno medidas – Exp Digital).

1.3. Traslado del recurso. Surtido el correspondiente traslado de los recursos propuestos, el extremo activo expuso su antagonismo frente al medio de impugnación formulado en contra del proveído del **10 de agosto de 2020**. A tal efecto, sostuvo que sobre el *sub-lite* no se aprecia una desproporción en las medidas decretadas, en tanto que las mismas buscan resguardar la expectativa patrimonial del acreedor frente a su pretensión ejecutiva. Al paso que destacó que la parte demandada podía hacer uso de la solicitud de caución prevista en el artículo 602 del C.G.P. Finalmente destacó la sociedad ejecutante la abstracción de las facturas cambiarias, resaltando que las circunstancias ínsitas al negocio causal no le son oponibles; aunado a que recalcó la necesidad de las medidas decretadas, habida consideración de los múltiples procesos ejecutivos promovidos en común en contra de la sociedad demandada (Cfr. Archivo 23 Cdno medidas – Exp Digital). En cuanto al auto del **14 de septiembre de 2020**, reiteró la parte actora lo indicado, agregando que las medidas decretadas por dicho proveído sí resultan procedentes, aún al margen de los recursos propuestos por la parte demandada.

2. CONSIDERACIONES

Las medidas cautelares son herramientas jurídico-procesales diseñadas para resguardar la real tutela jurisdiccional efectiva. Pues de estas pende que los intereses de los sujetos procesales no se tornen nugatorios a la hora de obtener una decisión favorable a sus súplicas. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que estas *“cumplen el rol de garantizar, de forma accesoria y temporal, los designios del juez, ante el peligro que la mora puede generar”*¹

Sin embargo, su decreto no atiende a un poder omnímodo del ejecutante, sino que se funda especialmente en la expectativa económica que este resguarda a la hora de incoar una pretensión ejecutiva de carácter patrimonial. La legislación adjetiva, no obstante, prevé la posibilidad de que el deudor-ejecutado solicite la reducción de embargos prevista en el artículo 600 del C.G.P. en consonancia con la regla 599 del mismo estatuto. Aunado a ello, los artículos 602 y 603 del Estatuto General del Proceso, contemplan como alternativa de levantamiento de precautorias la prestación de una caución, siempre y cuando ésta se realice *“... por el valor actual de la ejecución aumentada en un cincuenta por ciento (50%)”*.

Adicionalmente, el artículo 430 del Estatuto Procesal dispone que: *“Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal. --- Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso”*.

Lo anterior, en consonancia con lo preceptuado en el canon 244 permite establecer que la pretensión ejecutiva goza de un carácter de certeza soportado en la existencia de un derecho cierto que deber ser derruido en las etapas procesales establecidas y hasta tanto no se acredite la ausencia de los requisitos formales del título ejecutivo o alguno de los medios exceptivos, resulta imperioso continuar la ejecución con las garantías propias de todo proceso jurisdiccional.

¹ Cfr. Sentencia STC12155-2019 M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. En este mismo sentido, Sentencia del 14 de agosto de 1961 M.P. Enrique Coral Velasco. Gaceta Judicial Corte Suprema de Justicia – Sala Civil.

2.3. Caso concreto. Sea lo primero indicar que, en lo que respecta a la solicitud de suspensión del proceso de la referencia, la misma no será acogida favorablemente. Téngase presente que en el artículo 162 CGP se indica que *“La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia”*.

Así las cosas, no es la oportunidad para pronunciarse sobre lo requerido, atendiendo a lo previsto por la norma sobre el estado de dictar sentencia. Por tanto, no resulta posible acceder a la solicitud de suspensión del proceso formulada, dada la ausencia de requisitos para tal fin.

Ya en lo que concierne a los proveídos recurridos, debe decirse que las medidas decretadas sí atienden a la proporcionalidad que demanda el decreto de precautorias. Véase que el presente trámite ejecutivo tiene por fundamento unas facturas cambiarias que ascienden conjuntamente por concepto de capital por más de novecientos millones de pesos con sus intereses. De allí que resulte apenas proporcional y razonable, habida cuenta del interés patrimonial perseguido, haber decretado las medidas previas solicitadas por el extremo activo. Aunado a que, contrario a la tesis de la recurrente, en el presente asunto sí se aprecia una apariencia de buen derecho sobre el extremo ejecutante, pues la naturaleza de toda pretensión ejecutiva se consolida desde su etapa liminar a partir del correspondiente título ejecutivo, lo cual da lugar a predicar, *prima facie*, la certeza del crédito objeto de ejecución, y, por tanto, la apariencia de buen derecho del ejecutante. Este aspecto se patentiza sobre el *sub lite* con ocasión de las facturas cambiarias adosadas por la parte actora.

En todo caso, conviene destacar que las particularidades de los negocios subyacentes a las facturas cambiarias no pueden impedir la persecución del patrimonio del deudor por parte del extremo ejecutante, pues estos aspectos resultan relevantes en otros escenarios procesales. Sumado a esto, deviene necesario resaltar que, al margen de cualquier circunstancia, el Despacho en todo momento ha decretado las medidas con observancia de los límites pecuniarios que el artículo 599 del C.G.P. dispone, tal y como se puede apreciar en cada uno de los proveídos cuestionados por la recurrente.

Huelga precisar además que, en lo que respecta a la postura de la recurrente consistente en la ejecutoria del auto del pasado **10 de agosto de 2020** para posibilitar el decreto de otras medidas, tal tesis de disenso dista por completo de lo dispuesto por la legislación adjetiva sobre la notificación de proveídos que decretan medidas cautelares; particularmente lo previsto en la regla 298 del C.G.P., a cuyo tenor enseña en su inciso primero que *“Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Si fueren previas al proceso se entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersona en aquel o actúe en las o firme la respectiva diligencia”* y en su inciso final establece la misma norma que **“La interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar decretada. Todos los recursos se consideran interpuestos en el efecto devolutivo”**.

De tal suerte que, teniendo en cuenta la disposición normativa trasunta, la oposición formulada por el extremo pasivo no ha de ser acogida, pues la interposición de recursos no impide la consecución del decreto de las medidas cautelares, máxime cuando las decretadas por auto del **10 de agosto de 2020** son de carácter previo al no estar vinculada por pasiva la sociedad recurrente.

Así las cosas, en consideración a que los argumentos de disenso frente a lo decidido por el Despacho en los autos censurados no tienen vocación de prosperidad en esta oportunidad, no se repondrán los proveídos del **10 de agosto de 2020 y 14 de septiembre de 2020** y, de conformidad con las reglas 321.8, 323 y 298 del C.G.P., se concederá el recurso de apelación propuesto en el efecto devolutivo.

Finalmente, de conformidad con los artículos 602 y 603 del C.G.P., y ante la petición de la parte demandada, se fija caución pecuniaria por el monto de **\$1.707'681.190=**. Para tal efecto, se le concede el término de quince (15) días a la sociedad ejecutada.

Por último, se incorpora y se pone en conocimiento las respuestas allegadas por el **Banco Av Villas** (Cfr Archivo 21 cdno medidas – exp digital), y por los despachos judiciales: **Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín y Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad**, en donde indican que no fue posible tomar nota del embargo de remanentes comunicado (Cfr. Archivos 22 y 25 *ídem*).

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín,

Resuelve:

Primero: No suspender el presente trámite ejecutivo de la referencia, de acuerdo con las razones consignadas en este proveído.

Segundo: No reponer los autos proferidos los días **10 de agosto de 2020 y 14 de septiembre de 2020**, por los motivos expuestos a lo largo de esta decisión.

Tercero: Conceder el recurso de **apelación** en el efecto devolutivo frente a los proveídos del **10 de agosto y 14 de septiembre de este año**, ante el H. Tribunal Superior de Medellín – Sala Civil, de conformidad con los artículos 321.8, 323 y 298 del C.G.P. A través de la Secretaría del Despacho, gesticónese lo pertinente.

Cuarto: Fijar caución pecuniaria por el monto de **\$1.707'681.190=**. Para tal efecto, se le concede el término de quince (15) días a la sociedad ejecutada.

Quinto: Incorporar las respuestas allegadas por el **Banco Av Villas** (Cfr Archivo 21 cdno medidas – exp digital), y por los despachos judiciales: **Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín y Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad**, en donde indican que no fue posible tomar nota del embargo de remanentes comunicado (Cfr. Archivos 22 y 25 *ídem*).

NOTIFÍQUESE
ÁLVARO ORDOÑEZ GUZMÁN
JUEZ

2

Firmado Por:

ÁLVARO EDUARDO ORDOÑEZ GUZMAN
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 019 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2d931a34e4c92e741c3f3d526d776bfd3a04efe930608040e744b419cd4c7c72**
Documento generado en 05/10/2020 12:19:47 p.m.